# Mercados de carbono, estructuras de poder y distribución de beneficios

**Evidencia de género de la comunidad mbyá-guaraní de Tekoa Alecrín (Misiones, Argentina). Documento de trabajo**

*Mg. Ana Laura Jaruf**

## Resumen

Los mercados voluntarios de carbono (MVC) se presentan cada vez más como instrumentos capaces de financiar la mitigación y, a la vez, generar desarrollo local. Sin embargo, operan dentro de una arquitectura asimétrica: los estándares y metodologías se definen mayoritariamente en el Norte Global, la demanda proviene de corporaciones que buscan compensar sus emisiones y la mitigación se localiza en territorios del Sur. Los casos de conflicto documentados en América Latina, como Cordillera Azul en Perú o el proyecto de South Pole con Aticoya en Colombia, muestran que desarrolladores y certificadoras concentran el poder de definir qué cuenta como beneficio, quién lo recibe y cómo se mide. Este trabajo analiza cómo se expresan estas dinámicas al interior de las comunidades, con foco en la distribución de beneficios entre mujeres y varones.

Se estudia el proyecto Selva Paranaense Vida Nativa de Nideport, en Misiones, desarrollado junto a la comunidad mbyá-guaraní de Tekoa Alecrín y comunidades rurales vecinas, con certificación VCS y CCB Gold. El proyecto destina el 2% de los ingresos por venta de créditos a vivienda, agua potable, seguridad alimentaria, educación, empleo e inclusión de género. A partir de los informes de monitoreo, se examina el acceso de las mujeres al empleo, la capacitación, los activos productivos y los espacios de decisión.

Los resultados muestran avances concretos pero desiguales. Las mujeres representan 75 de las 200 personas capacitadas, y diez socias de una cooperativa recibieron equipamiento productivo. Sin embargo, ocupan solo dos de los trece empleos directos, lejos de la meta de 45–50%, y el ingreso promedio de los hogares sigue por debajo de la línea de pobreza. Mientras la literatura reporta primas de alrededor del 30% para créditos con co-beneficios sociales, la porción que retorna al territorio es acotada, lo que plantea interrogantes sobre quién se apropia del valor generado.

El caso muestra que contar mujeres beneficiarias no equivale a medir cambios en su autonomía económica o poder de decisión, y que los marcos de integridad definidos desde el Norte tienden a reducir el género a un indicador de cumplimiento. Se propone un enfoque distributivo, sensible al género y atento a las relaciones de poder para evaluar la integridad social de los mercados de carbono.

**Palabras clave:** mercados voluntarios de carbono, relaciones Norte–Sur, distribución de beneficios, género y cambio climático, integridad social.

*Magíster en Economía por la Universidad de Buenos Aires.

## Introducción

El cambio climático es uno de los principales desafíos económicos, ambientales y sociales del siglo XXI. Cumplir los objetivos del Acuerdo de París exige no solo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), sino también movilizar capital hacia proyectos capaces de acelerar la transición hacia modelos de desarrollo más sostenibles e inclusivos. En este contexto, han surgido diversos instrumentos financieros para canalizar recursos hacia la acción climática, entre ellos los bonos temáticos, las finanzas sostenibles y los mercados de carbono.

Dentro de este conjunto de herramientas, los Mercados Voluntarios de Carbono (MVC) han ganado creciente relevancia en la última década. Estos mercados permiten que empresas, gobiernos, organizaciones e individuos adquieran créditos de carbono de manera voluntaria para compensar parte de sus emisiones, generalmente en el marco de estrategias de sostenibilidad, compromisos de carbono neutralidad u objetivos Net Zero. Cada crédito representa la reducción, evitación o remoción verificada de una tonelada de dióxido de carbono equivalente ($tCO_2e$), generada por proyectos que van desde la conservación forestal y la restauración de ecosistemas hasta iniciativas de energía renovable, eficiencia energética o gestión de residuos (IVCM, 2026).

Más allá de su función ambiental, los mercados voluntarios de carbono también tienen el potencial de convertirse en una fuente de financiamiento para proyectos que producen beneficios adicionales en los territorios donde se implementan. En algunos casos, los ingresos por la venta de créditos contribuyen a fortalecer los medios de vida locales, promover el desarrollo comunitario, mejorar el acceso a servicios básicos y apoyar procesos de conservación que generan impactos económicos y sociales positivos (Lou, Hultman, Patwardhan, & Lucy Qiu, 2022). Esta capacidad de canalizar recursos hacia iniciativas con múltiples beneficios ha alimentado un interés creciente por evaluar no solo la integridad climática de los créditos de carbono, sino también sus resultados en materia de desarrollo sostenible.

En este marco, la dimensión de género ha adquirido cada vez mayor relevancia. Diversos organismos internacionales han señalado que las mujeres —en particular las que pertenecen a comunidades rurales, indígenas o vulnerables— tienden a soportar de manera desproporcionada los efectos del cambio climático, al tiempo que enfrentan mayores barreras para acceder a recursos productivos, financiamiento y espacios de toma de decisiones (WEF, 2022). No obstante, también cumplen un rol fundamental en la gestión sostenible de los recursos naturales y en la implementación de estrategias de adaptación y mitigación (FAO, 2023). Incorporar la perspectiva de género en los proyectos del mercado de carbono responde, por lo tanto, no solo a criterios de equidad, sino que también puede contribuir a mejorar la eficacia, la legitimidad y la sostenibilidad de las intervenciones climáticas.

El mercado voluntario de carbono atraviesa actualmente un período de transformación. Tras una fase de fuerte expansión impulsada por los compromisos corporativos de descarbonización, el sector enfrenta debates sobre la calidad de los créditos, la adicionalidad de los proyectos, la permanencia de las reducciones de emisiones y la transparencia de los mecanismos de certificación. En respuesta, han surgido nuevos estándares, metodologías y marcos de integridad orientados a fortalecer la confianza de los participantes y a garantizar que los beneficios climáticos y sociales sean reales, medibles y verificables (Climate Focus, 2025).

En América Latina, la expansión de estos mercados presenta rasgos particulares debido a la riqueza de los ecosistemas de la región, la importancia de los proyectos forestales y el rol creciente de las

comunidades locales e indígenas en la generación de créditos (Climate Focus, 2025). Argentina forma parte de esta tendencia, aunque con un rol incipiente, con iniciativas que buscan combinar la mitigación climática con objetivos de desarrollo territorial y fortalecimiento comunitario.

Sin embargo, esta expansión no ocurre en un espacio neutral. Las reglas que definen qué es un crédito de calidad, qué metodologías son válidas y qué co-beneficios se reconocen se fijan mayoritariamente en el Norte Global, a través de certificadoras, iniciativas de integridad y compradores corporativos con sede en Estados Unidos y Europa. En cambio, los territorios donde efectivamente se conservan los bosques y se generan las reducciones de emisiones se concentran en el Sur Global, a menudo en tierras habitadas por pueblos indígenas y comunidades rurales. Esta asimetría entre quienes fijan las reglas y quienes sostienen materialmente la mitigación plantea interrogantes sobre cómo se distribuye el valor generado por estos mercados.

Frente a este panorama, este trabajo analiza los mercados voluntarios de carbono como parte de una arquitectura transnacional de financiamiento climático atravesada por relaciones de poder, y examina cómo esas relaciones se expresan en la distribución de beneficios al interior de las comunidades donde se implementan los proyectos. Para ello, estudia un caso argentino que destina recursos provenientes de la venta de créditos de carbono a proyectos de impacto social, con especial atención al acceso de las mujeres al empleo, la capacitación, los activos productivos y los espacios de decisión. Las preguntas orientadoras son: quién se apropia del valor generado por los ecosistemas del Sur Global y, dentro de la porción que retorna al territorio, cómo se distribuye entre mujeres y varones. De este modo, el trabajo busca contribuir al debate sobre la integridad social de los mercados de carbono desde la perspectiva de la economía feminista, que considera no solo la presencia de mujeres entre las personas beneficiarias, sino también las estructuras que condicionan su autonomía económica.

## El mercado voluntario de carbono

El Mercado Voluntario de Carbono (MVC) es aquel en el que empresas, gobiernos, organizaciones e individuos adquieren créditos de carbono de manera voluntaria —sin ninguna obligación regulatoria— para compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). A diferencia del mercado regulado o de cumplimiento (como el EU-ETS[1] o el RGGI[2]), la participación en el MVC es discrecional y responde a compromisos corporativos de reducción de emisiones, estrategias de neutralidad climática u objetivos Net Zero (IVCM, 2026).

Cada crédito de carbono representa la reducción, evitación o remoción verificada de una tonelada de dióxido de carbono equivalente ($tCO_2e$) de la atmósfera. Una vez que un comprador adquiere y "retira" un crédito, este sale de circulación para evitar la doble contabilización (S&P Global, 2021).

Estas reducciones pueden provenir de proyectos diversos, como la conservación y restauración forestal, la captura de metano, la generación de energía renovable o el despliegue de tecnologías eficientes que reducen el consumo de combustibles fósiles. La lógica que sustenta estos mercados es la compensación de emisiones: una organización puede adquirir créditos de carbono para neutralizar parte de sus emisiones residuales financiando reducciones o remociones que ocurren en otro lugar (ICMA, 2025).

[1] El EU ETS (Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea) es el primer y mayor mercado internacional de carbono del mundo.

[2] La Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) es el primer mercado obligatorio de carbono de tipo *cap-and-trade* de Estados Unidos.

Según Climate Focus (2025), los créditos se clasifican según su naturaleza en: i) créditos de evitación/reducción —proyectos que impiden que las emisiones se produzcan—; y ii) créditos de remoción/captura —proyectos que extraen $CO_2$ de la atmósfera—. La distinción es relevante porque los créditos de remoción son más caros, ya que se consideran de mayor integridad: su impacto climático es más permanente y medible (MSCI, 2026; Climate Focus, 2025).

## Formación del precio de los créditos de carbono

A diferencia de los sistemas de comercio de emisiones (ETS), donde el precio surge de mercados regulados y mecanismos de subasta, en el mercado voluntario de carbono (MVC) no existe un precio único para los créditos. Su valor depende de múltiples atributos de calidad, lo que genera una amplia dispersión de precios entre proyectos que a primera vista pueden parecer similares. Según MSCI (2026), los precios pueden oscilar entre menos de USD 3 y más de USD 50 por tonelada de $CO_2e$ en los mercados convencionales, mientras que algunas tecnologías de remoción pueden alcanzar valores significativamente mayores.

Entre los factores que más inciden en la formación del precio se encuentran el tipo de proyecto, la adicionalidad, la permanencia de las reducciones y la antigüedad (*vintage*) del crédito, siendo el tipo de proyecto uno de los principales determinantes. Los créditos provenientes de proyectos de remoción —como forestación, reforestación o captura directa del aire— tienden a negociarse a precios más altos que los de proyectos de evitación de emisiones, debido a su mayor capacidad de generar reducciones netas de carbono. Asimismo, dentro de cada categoría, los proyectos que ofrecen beneficios ambientales o sociales adicionales tienden a obtener mayor valor (Climate Focus, 2025).

También se considera la adicionalidad, es decir, que la reducción o remoción de emisiones no habría ocurrido sin los ingresos generados por la venta de créditos. En consecuencia, los proyectos que demuestran de manera robusta su dependencia financiera del mercado voluntario tienden a ser mejor valorados (World Bank, 2025).

Se tienen en cuenta, además, la permanencia y el riesgo de reversión: los compradores valoran más los proyectos cuyos beneficios climáticos pueden sostenerse en el largo plazo y tienen menor probabilidad de revertirse. Por ejemplo, un proyecto forestal ubicado en una región con fuerte presión de cambio de uso del suelo o conflictos territoriales puede enfrentar descuentos por riesgo (World Bank, 2025).

La antigüedad del crédito también incide en el precio. Los créditos emitidos bajo estándares más recientes tienden a cotizar con prima respecto de los más antiguos, lo que refleja requisitos metodológicos y de monitoreo más exigentes (Climate Focus, 2025).

## Los co-beneficios sociales como impulsores de valor económico

Más allá de los atributos estrictamente climáticos, el mercado valora cada vez más los proyectos que generan beneficios sociales verificables, ya que se espera que estos los vuelvan más sostenibles. Estos co-beneficios incluyen la mejora de los medios de vida, el acceso a servicios básicos, la creación de empleo, el fortalecimiento comunitario, la equidad de género y la participación de los pueblos indígenas. En muchos casos, estos beneficios adicionales son los verdaderos motores de la acción de mitigación en los países en desarrollo, ya que alinean los objetivos climáticos con las prioridades nacionales de desarrollo sostenible (Santucci, Puhl, Sinha, & Agyemang-Bonsu, 2015).

Los co-beneficios abarcan una amplia gama de dimensiones sociales, económicas y ambientales, entre ellas:

1. **Socioeconómicos:** creación de empleos verdes, mejora de la seguridad energética mediante la inversión en energías limpias y mejora de la seguridad alimentaria (Liu et al., 2020);
2. **Salud y calidad de vida:** mejor calidad del aire, menos enfermedades respiratorias (por ejemplo, mediante cocinas eficientes) y ahorro en costos de salud (Liu et al., 2020; Santucci, Puhl, Sinha, & Agyemang-Bonsu, 2015; Carbon Market Watch, 2026);
3. **Empoderamiento y género:** la igualdad de género se identifica como un co-beneficio crítico, ya que apoyar los medios de vida de las mujeres produce retornos positivos en la nutrición y la educación de niñas y niños (FAO, 2023);
4. **Gobernanza y paz:** en países afectados por conflictos, la conservación forestal puede generar co-beneficios en la construcción de paz, la gobernanza territorial y la protección de los derechos de los pueblos indígenas (Castro-Nunez, 2018);
5. **Valores comunitarios:** el fomento de una comunidad más benevolente y moral, preocupada por el bienestar mutuo (Bain et al., 2015).

La evidencia empírica muestra que los compradores están dispuestos a pagar primas significativas por créditos asociados a impactos sociales demostrables (Santucci, Puhl, Sinha, & Agyemang-Bonsu, 2015). Lou et al. (2022) encuentran que los proyectos con mayor probabilidad de generar beneficios de desarrollo obtienen precios aproximadamente un 30,4% más altos que aquellos con bajos niveles de co-beneficios. Esta mayor disposición a pagar se explica porque dichos créditos representan una inversión de alta integridad que reduce riesgos y genera valor tangible más allá de la mera mitigación de emisiones (Lou, Hultman, Patwardhan, & Lucy Qiu, 2022).

Además, los créditos certificados bajo estándares que cuantifican sistemáticamente sus impactos económicos, ambientales y sociales (como el Gold Standard) capturan precios significativamente más altos en los mercados voluntarios (Santucci, Puhl, Sinha, & Agyemang-Bonsu, 2015), con primas estimadas de entre 6,6% y 29% (Lou, Hultman, Patwardhan, & Lucy Qiu, 2022).

Esta valoración económica refleja una evolución conceptual del mercado voluntario de carbono: los créditos ya no se perciben exclusivamente como instrumentos de mitigación climática, sino que se están convirtiendo en mecanismos de financiamiento del desarrollo sostenible.

No obstante, el mercado no ha estado exento de riesgos y conflictos documentados, en particular en América Latina. Una investigación periodística publicada en enero de 2023 sobre Verra —la mayor certificadora del mundo, responsable de aproximadamente tres cuartas partes de todos los créditos voluntarios emitidos a nivel global— concluyó que alrededor del 90% de sus créditos forestales no representaban reducciones reales de emisiones: los bosques supuestamente en riesgo de deforestación nunca estuvieron amenazados en la medida declarada (Dyke, 2025).

El impacto en el mercado fue inmediato y medible. Según informes del sector, el MVC se contrajo un 61%, de USD 1.900 millones en 2022 a USD 723 millones en 2023. Los créditos de proyectos REDD+ —los más expuestos al escándalo, ya que eran precisamente los cuestionados— perdieron el 62% de su valor en el mismo período. Como resultado, Verra registró en 2023 la mayor pérdida financiera de su historia (USD 9,3 millones) (Redd Monitor, 2024).

Desde una perspectiva social, se destaca el caso de Carbonext en la Amazonía brasileña: enfrentó denuncias de apropiación ilegal de tierras y tala ilegal que terminaron comprometiendo la viabilidad comercial de los créditos emitidos. Tras las investigaciones de 2024, Verra suspendió la emisión de nuevos créditos de los proyectos involucrados, lo que afectó operaciones respaldadas por destacados compradores corporativos internacionales (Wenzel, 2024).

En Colombia, el proyecto REDD+ desarrollado por South Pole y la organización indígena Aticoya es otro ejemplo de los costos asociados a la falta de transparencia y al incumplimiento de los compromisos asumidos con las comunidades locales. El acuerdo, previsto originalmente por veinte años, se rescindió anticipadamente tras denuncias de que las actividades de conservación no se habían realizado y de que los pagos prometidos por la venta de créditos nunca se habían transferido efectivamente (Tavera, 2024). De manera similar, la sentencia de la Corte Constitucional colombiana sobre el proyecto Baka Rokarire, en el territorio indígena de Pirá Paraná, estableció que la falta de una consulta adecuada y los impactos sociales y territoriales generados vulneraron los derechos fundamentales de las comunidades involucradas, sentando un precedente para futuros proyectos de pago por servicios ambientales (Bermúdez Liévano, 2024).

El caso del Parque Nacional Cordillera Azul, en Perú, ilustra también los riesgos de excluir a los actores locales de la distribución de beneficios. Entre 2008 y 2022 se vendieron más de 30 millones de créditos de carbono por un valor superior a USD 80 millones; sin embargo, las comunidades kichwa denunciaron que no habían participado ni recibido beneficios de esas transacciones, lo que derivó en acciones judiciales y en un fallo a su favor en 2024 (Instituto de Defensa Legal, 2024).

Por último, la magnitud de estos efectos trasciende los proyectos individuales. Según estimaciones para el sector minero peruano, la combinación de conflictividad social y demoras administrativas en 23 proyectos entre 2008 y 2022 impidió generar aproximadamente S/[3] 698.296 millones de producto bruto interno, S/ 122.689 millones de recaudación tributaria y más de 541.000 empleos por año (Instituto Peruano de Economía, 2023). En conjunto, estos antecedentes sugieren que los conflictos socioambientales no son solo un riesgo reputacional o legal, sino también un factor material capaz de afectar significativamente la rentabilidad, la ejecución y la sostenibilidad financiera de los proyectos vinculados a los recursos naturales y a los mercados climáticos.

En síntesis, uno de los principales desafíos que enfrentan hoy los mercados de carbono es la integridad ambiental y social de los créditos emitidos (World Bank, 2025). Los casos observados en Brasil y Colombia muestran que la integridad de los mercados de carbono depende no solo de la capacidad de reducir emisiones, sino también de garantizar salvaguardas sociales, una distribución equitativa de los beneficios y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. En este contexto, la confianza en los créditos de carbono se ha convertido en un factor central para asegurar la eficacia y la legitimidad de los mecanismos de financiamiento climático.

## Los mercados de carbono como arquitectura de poder: una lectura Norte–Sur

Los casos revisados no son anomalías aisladas, sino expresiones de una estructura más amplia. Desde los inicios de estos mercados, la literatura crítica advirtió que la lógica de la compensación permite a los emisores del Norte mantener sus niveles de emisión trasladando la responsabilidad de la mitigación a

[3] Sol peruano.

territorios del Sur, lo que Bachram (2004) denominó “colonialismo de carbono”. En la misma línea, Fairhead, Leach y Scoones (2012) describen como “acaparamiento verde” (*green grabbing*) la apropiación de tierras y recursos con fines ambientales, mediante la cual la conservación se convierte en un activo que circula en los mercados globales mientras el control sobre el territorio se aleja de las comunidades. Esta lectura dialoga con los aportes de la economía feminista sobre las estructuras de poder de la economía global, que señalan que las reglas fijadas en el Norte y el poder de las corporaciones transnacionales reproducen desigualdades que no son meramente locales o nacionales, sino globales.

Esta asimetría puede observarse en al menos tres dimensiones. La primera es la fijación de reglas: los principales programas de certificación —Verra, con sede en Washington, y Gold Standard, con sede en Ginebra— y las iniciativas que establecen criterios de integridad del mercado, como el Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM), con sede en Londres, se ubican en el Norte Global. Estas instituciones determinan qué metodologías son válidas, qué cuenta como co-beneficio y qué indicadores deben reportarse, incluidos los indicadores de género.

La segunda es la demanda: Europa y América del Norte han concentrado históricamente las compras en el mercado voluntario. Según Ecosystem Marketplace (2020), la participación de los compradores europeos en el total de compensaciones adquiridas pasó del 48% en 2016 al 63% en 2019, con una marcada preferencia por créditos de proyectos internacionales, mayoritariamente ubicados fuera de Europa.

La tercera es la captura de valor: aunque los proyectos se ubican mayoritariamente en el Sur, las empresas que los gestionan tienden a tener sede en el Norte. Un relevamiento de Carbon Market Watch (2024) sobre una muestra global de proyectos encontró que solo el 13% se ubicaba en países con desarrollo humano muy alto, pero más de la mitad de las empresas involucradas —desarrolladoras, propietarias, consultoras y validadoras— tenía sede en esos países; en la muestra africana, más del 62% de las empresas provenía de países con desarrollo humano muy alto y menos del 28% tenía sede en el propio continente. A esto se suma la opacidad de la cadena de intermediación: nueve de cada diez intermediarios no informan sus comisiones o márgenes, lo que impide determinar qué porción de lo que paga el comprador final llega efectivamente a los proyectos y las comunidades (Carbon Market Watch, 2023).

La distribución de beneficios con las comunidades locales tampoco está sujeta a reglas uniformes. Healy et al. (2023) señalan que las desarrolladoras suelen ser empresas especializadas que operan a escala global y no forman parte de las comunidades donde se implementan los proyectos, y que existe poca transparencia sobre si los ingresos por la venta de créditos llegan a los actores locales, y en qué proporción. Una investigación reciente en Zimbabue documenta proyectos cuyos créditos se vendieron a corporaciones altamente emisoras sin que las comunidades conocieran esas transacciones ni existiera ningún acuerdo de distribución de beneficios, y concluye que, en todo el sector, las desarrolladoras e intermediarios con sede mayoritariamente en países de altos ingresos capturan el grueso del valor financiero (Swedwatch, 2026). En respuesta, algunos Estados del Sur han comenzado a fijar porcentajes obligatorios de los ingresos de los proyectos, como el 30% establecido por Zimbabue en 2025 (Swedwatch, 2026).

Esta arquitectura tiene implicancias directas en materia de género. Si las métricas de integridad social se definen en el Norte y se orientan principalmente a satisfacer las demandas de información de

compradores e inversores, existe el riesgo de que el género quede reducido a un indicador de cumplimiento —por ejemplo, la cantidad de mujeres capacitadas o empleadas— en lugar de una evaluación de los cambios en su autonomía económica, su acceso a recursos productivos y su poder de decisión. Al mismo tiempo, la prima de precio que el mercado otorga a los créditos con co-beneficios sociales (Lou, Hultman, Patwardhan, & Lucy Qiu, 2022) se materializa en el precio que paga el comprador, pero no hay garantía de que una porción equivalente llegue a las comunidades que la hacen posible. La pregunta por la integridad social, por lo tanto, no puede limitarse a verificar si existen beneficios; debe considerar también quién decide cómo se distribuyen y en qué proporción.

La evidencia reciente sugiere que los proyectos climáticos y de conservación no son neutrales en términos de género, sino que las desigualdades preexistentes pueden condicionar tanto la exposición a los riesgos climáticos como el acceso a las oportunidades económicas que generan los mercados de carbono. En consecuencia, la integridad social de estos mecanismos no puede evaluarse únicamente a partir de criterios de participación comunitaria o de distribución de beneficios; debe considerar también si contribuyen a reducir o, por el contrario, a reproducir las brechas de género existentes. Desde esta perspectiva, la mirada de género resulta indispensable para comprender quiénes se benefician de los proyectos de carbono y en qué condiciones.

## Un marco sensible al género para las finanzas climáticas y el desarrollo inclusivo

La literatura especializada ha avanzado hacia un consenso creciente en torno a que el cambio climático no es un fenómeno socialmente neutral, sino que reproduce y amplifica desigualdades estructurales preexistentes. En este marco, el género emerge como una dimensión central para comprender la distribución desigual de los impactos climáticos y de las capacidades de adaptación. Las mujeres tienden a enfrentar mayores niveles de vulnerabilidad debido al acceso restringido a recursos productivos, financieros e institucionales, así como a normas sociales que limitan su autonomía económica y su participación en la toma de decisiones. Estas condiciones se traducen en mayores cargas de trabajo no remunerado, mayor exposición a la inseguridad alimentaria, peor salud y menos oportunidades de acceder a información y tecnologías climáticas. En consecuencia, los organismos internacionales sostienen que cerrar las brechas de género es un componente esencial de las estrategias de adaptación y resiliencia, y reconocen a las mujeres no solo como población vulnerable, sino también como agentes clave de transformación (FAO, 2023).

Sobre esta base, los enfoques contemporáneos de desarrollo sostenible han incorporado progresivamente la perspectiva de género como un componente estructural de la llamada integridad social de los proyectos climáticos y ambientales. Este cambio implica una transición desde modelos centrados exclusivamente en la mitigación de emisiones hacia esquemas que buscan maximizar simultáneamente los beneficios ambientales y sociales. Iniciativas como el Mecanismo de Donaciones Dedicado a Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (DGM), lanzado en el marco del Programa de Inversión Forestal, reflejan esta evolución al promover la gobernanza participativa, la distribución de beneficios y el fortalecimiento del desarrollo local. En estos programas, la equidad de género se integra como un objetivo explícito mediante la promoción de la participación de las mujeres en la toma de decisiones, el acceso al financiamiento y el apoyo a emprendimientos productivos (World Bank, 2025).

A partir de este cambio de paradigma, la inclusión de género también comenzó a reinterpretarse desde la perspectiva de la eficiencia económica y el desempeño financiero. La evidencia empírica sugiere que

la participación de las mujeres en el liderazgo empresarial y el emprendimiento se asocia con mejores resultados económicos. Estudios internacionales muestran que las empresas fundadas por mujeres generan más del doble de ingresos por dólar invertido que las fundadas por varones (USD 0,78 frente a USD 0,31 por dólar invertido) y que, durante sus primeros cinco años, registran mayores ingresos acumulados pese a recibir menos financiamiento inicial (Abouzahr, Brooks Taplett, Krentz, & Harthorne, 2018).

En América Latina, esta tendencia también se observa entre las empresas cotizadas, donde una mayor participación femenina se asocia con un retorno sobre la inversión un 44% mayor y márgenes de ganancia un 47% más altos (IDB Invest, 2019). Asimismo, los fondos de inversión con mayor diversidad de género muestran tasas internas de retorno (TIR) hasta un 20% más altas, y las empresas lideradas por equipos diversos presentan aumentos de valuación un 25% mayores entre rondas de financiamiento (IDB Invest, 2019). En este contexto, la diversidad no solo mejora la eficiencia organizacional y reduce los riesgos del pensamiento grupal, sino que adquiere relevancia estratégica en mercados donde las mujeres influyen en aproximadamente el 70%–80% de las decisiones de consumo a nivel global (Abouzahr, Brooks Taplett, Krentz, & Harthorne, 2018).

Este enfoque se complementa con la dimensión territorial del empoderamiento económico de las mujeres, en particular en contextos rurales e indígenas, donde las desigualdades de género se entrecruzan con restricciones estructurales de acceso a la tierra, el crédito y los activos productivos. La evidencia muestra que, cuando estas barreras se reducen, las mujeres cumplen un rol central en la dinamización de las economías locales y en el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria (UN, 2020). Las experiencias latinoamericanas respaldan estos hallazgos: en Perú, el proyecto MARENASS permitió que 101 grupos de mujeres aumentaran su capital un 76%, equivalente a aproximadamente USD 210.000 (UN, 2013), mientras que en Chile el programa Genera Mujer Emprendedora reportó aumentos de ventas para el 54% de sus participantes (UN, 2020). No obstante, persisten brechas de financiamiento significativas, estimadas en USD 5.000 millones para las microempresas lideradas por mujeres y en USD 93.000 millones para las pymes lideradas por mujeres en América Latina y el Caribe (IDB Invest, 2019).

Por último, este marco se ve reforzado por el rol de la tecnología y la inclusión financiera como habilitadores claves de una transición hacia sistemas climáticos con perspectiva de género. Las soluciones *fintech* permiten ampliar el acceso al crédito mediante el uso de datos alternativos, lo que reduce las restricciones derivadas de la falta de historial crediticio formal (IDB Invest, 2019). La educación financiera también surge como un componente crítico para fortalecer la autonomía económica de las mujeres, como muestran programas como JUNTOS y MARENASS en Perú (UN, 2013). Al mismo tiempo, el desarrollo de plataformas digitales, fondos de inversión con perspectiva de género como Rethink Impact o NESsT, y ecosistemas de emprendimiento digital orientados al impacto social están contribuyendo a ampliar el acceso de las mujeres a la capacitación, los mercados y las cadenas globales de valor (IDB Invest, 2019).

## Evolución normativa de la perspectiva de género en el mercado voluntario de carbono

Durante las primeras etapas del mercado voluntario de carbono, en particular entre 2000 y 2015, la perspectiva de género estuvo prácticamente ausente de los estándares de certificación. El foco estaba puesto en demostrar las reducciones o remociones de emisiones, la adicionalidad y la integridad

ambiental de los proyectos. Los beneficios sociales se consideraban deseables, pero en general secundarios, y no constituían un requisito central de certificación.

Con la consolidación de la agenda internacional de desarrollo sostenible, y especialmente tras la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015 y del Acuerdo de París, comenzó a reconocerse que la acción climática podía tener impactos diferenciados sobre mujeres y varones. Este cambio impulsó una transición desde una mirada centrada exclusivamente en el carbono hacia enfoques más amplios de sostenibilidad e inclusión social (FAO, 2023; Lou, Hultman, Patwardhan, & Lucy Qiu, 2022).

Uno de los primeros avances significativos provino del Gold Standard[4], que incorporó explícitamente las contribuciones de los proyectos a los ODS, incluido el ODS 5 (Igualdad de Género). Bajo este enfoque, las desarrolladoras comenzaron a reportar indicadores vinculados al empleo femenino, el acceso de las mujeres a energía limpia, la reducción del tiempo dedicado a tareas domésticas y la participación en actividades productivas (FAO, 2023).

Posteriormente, estándares como Verra, a través de los Climate, Community and Biodiversity Standards (CCB), fortalecieron los requisitos vinculados a la participación comunitaria, el consentimiento informado y la distribución equitativa de beneficios (EcoSecurities, 2025). Aunque no fueron diseñados originalmente desde una perspectiva de género, estos estándares comenzaron a exigir evaluaciones de impacto social que visibilizaron las desigualdades existentes al interior de las comunidades beneficiarias.

La década de 2020 trajo un cambio cualitativo. Organismos multilaterales, agencias de cooperación y actores del mercado comenzaron a sostener que la integridad de los créditos debía evaluarse no solo por sus resultados climáticos, sino también por la calidad de sus impactos sociales. En este contexto surgieron iniciativas para fortalecer la participación de las mujeres rurales, los pueblos indígenas y las comunidades locales en la gobernanza de los proyectos climáticos y en los mecanismos de distribución de beneficios (World Bank, 2025).

La tendencia predominante hoy en el mercado voluntario de carbono es pasar de una lógica de “no hacer daño” a una de “generar beneficios sociales verificables” (World Bank, 2025). En este nuevo paradigma, la igualdad de género ya no se considera solo una salvaguarda social, sino un componente potencial de creación de valor. Además, como se mencionó anteriormente, los créditos asociados a beneficios sociales verificables obtienen primas de precio respecto de los que solo demuestran resultados ambientales, lo que crea incentivos económicos para incorporar objetivos de inclusión y empoderamiento de las mujeres en el diseño de los proyectos.

No obstante, la integración del género en el mercado voluntario de carbono todavía enfrenta grandes desafíos. La mayoría de los estándares sigue priorizando los indicadores ambientales, mientras que las métricas de género tienden a ser heterogéneas, voluntarias o difíciles de comparar entre proyectos. Como resultado, persiste una brecha entre el reconocimiento discursivo de la importancia de la igualdad de género y la existencia de mecanismos estandarizados para medir y monetizar sus resultados de manera consistente (FAO, 2023).

[4] Uno de los principales estándares del mercado.

## El caso Nideport y la importancia de incluir a las mujeres en los proyectos climáticos vinculados al mercado de carbono

Según el PNUD (UNDP, 2025), estudios basados en Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador y Paraguay muestran cómo el empoderamiento de las mujeres mejora la conservación forestal y la reducción de emisiones. La investigación destaca que incluir a las mujeres en la toma de decisiones y en el acceso al financiamiento no solo aborda la desigualdad, sino que también vuelve más sostenibles las intervenciones ambientales. Al transformar normas sociales y barreras estructurales, estos proyectos logran mejores resultados económicos y ecológicos para las comunidades rurales e indígenas (UNDP, 2025).

En este contexto, un caso argentino recoge estas lecciones al destinar parte de sus ingresos a proyectos sociales y con enfoque de género. Se trata de Nideport S.A., una empresa dedicada a la restauración ecológica y la conservación de la biodiversidad, con un fuerte enfoque social y respaldada por tecnología avanzada. Su misión principal es restaurar el capital natural del planeta mediante la colaboración activa con las comunidades locales y la emisión de créditos de carbono de alta calidad (Verra, 2025).

La empresa se especializa en la recuperación de ecosistemas degradados mediante la reforestación y el enriquecimiento forestal con especies nativas. Su proyecto insignia, Vida Nativa, protege y restaura 22.878 hectáreas de la Selva Paranaense (Bosque Atlántico) en Misiones, Argentina. El proyecto se destaca como uno de los mayores proyectos de manejo forestal mejorado sin extracción de madera del mundo y cuenta con certificaciones internacionales de Verra bajo los estándares VCS y CCB Nivel Oro (Nideport, 2026).

Para alcanzar sus objetivos, Nideport integra tecnologías como inteligencia artificial y drones autónomos para el monitoreo y la vigilancia; sensores IoT y monitoreo satelital para prevenir incendios, tala ilegal y caza furtiva; y *blockchain* para garantizar la trazabilidad y la transparencia de su gestión (Nideport, 2026).

En términos de impacto social, Nideport destina el 2% de los ingresos obtenidos por la venta de créditos de carbono al financiamiento de proyectos de desarrollo comunitario en el área de influencia de Selva Paranaense Vida Nativa. La principal alianza es con la comunidad indígena mbyá-guaraní de Tekoa Alecrín y otras comunidades rurales cercanas, con las que se implementaron procesos de Consulta Pública y de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) para definir de manera participativa las prioridades de intervención y asegurar el respeto de sus derechos, su cultura y sus formas de organización social (Verra, 2025; Nideport, 2026).

Las acciones implementadas se concentran en cuatro ejes principales: vivienda, seguridad alimentaria, inclusión productiva y equidad de género. En el marco del Proyecto Óga se construyeron y entregaron ocho viviendas diseñadas según la arquitectura tradicional guaraní, con una meta de largo plazo de 50 unidades habitacionales. Además, el Proyecto Ra'ÿi apoyó la creación de diez huertas comunitarias agroecológicas para fortalecer la seguridad alimentaria mediante la producción de maíz, mandioca, zapallo y otros alimentos. Las obras de captación y distribución de agua beneficiaron a 198 integrantes de Tekoa Alecrín y a más de 600 personas de comunidades vecinas, y contribuyeron a reducir la incidencia de enfermedades de origen hídrico (Nideport, 2026).

En el plano productivo, el proyecto promueve el empleo local y el desarrollo de capacidades. A la fecha se crearon 13 empleos directos y se capacitó a 200 personas, 75 de ellas mujeres. Aunque actualmente dos de los puestos están ocupados por mujeres, la iniciativa mantiene el compromiso de alcanzar una participación femenina del 45% al 50% de la plantilla. Además, el programa Carbono Participativo benefició a 495 estudiantes de escuelas locales mediante la mejora de las condiciones educativas (Nideport, 2026).

Un componente clave es el apoyo a la Cooperativa Nueva Esperanza, integrada por mujeres dedicadas a la recolección y el procesamiento de productos forestales no madereros. A través del programa Mujeres Cultivadoras, sus socias recibieron asistencia técnica y capacitación en producción sostenible, conservación de semillas y prevención de la violencia de género, así como equipamiento productivo estratégico, que incluyó una envasadora semiautomática, tanques de fermentación, un freezer y una procesadora de alimentos. Estas acciones buscan aumentar la productividad, diversificar la producción, facilitar el acceso a nuevos mercados y fortalecer la autonomía económica de las mujeres rurales.

Por último, el proyecto incorporó iniciativas complementarias de educación ambiental y restauración ecológica, entre ellas el vivero Don Antonio, orientado a la producción de especies medicinales nativas, la reforestación y la valorización de los saberes tradicionales. Según los informes de monitoreo, durante el período evaluado no se registraron impactos sociales negativos significativos ni conflictos formales con las comunidades, aunque persisten desafíos socioeconómicos importantes, ya que los ingresos promedio de los hogares siguen por debajo de la línea de pobreza provincial (Verra, 2025).

A continuación, se presentan los resultados del monitoreo realizado por Verra en 2025:

| **Categoría** | **Indicador social** | **Logro / cifra actual** | **Meta o detalle adicional** |
|---|---|---|---|
| Empleo y género | Empleos directos creados | 13 empleos | Meta final de 50 empleos directos. |
| Empleo y género | Participación femenina en el empleo | 2 mujeres | Una en Restauración y una en Logística; meta de 45–50%. |
| Empleo y género | Personas capacitadas (total) | 200 personas | Incluye seguridad alimentaria, manejo del fuego y gobernanza. |
| Empleo y género | Mujeres capacitadas | 75 mujeres | Talleres de género y técnicos. |
| Infraestructura | Viviendas construidas (Proyecto Óga) | 8 viviendas | Meta de 50; resistieron fuertes tormentas en 2025. |
| Infraestructura | Acceso a agua potable | 198 personas | En Tekoa Alecrín; más de 600 personas beneficiadas en zonas cercanas. |
| Educación | Estudiantes beneficiados | 495 estudiantes | Apoyo a 7 instituciones con materiales y mobiliario. |
| Seguridad alimentaria | Huertas comunitarias (Ra'ÿi) | 10 huertas | Cultivos agroecológicos de maíz, mandioca y zapallo. |
| Desarrollo productivo | Cooperativa Nueva Esperanza | 10 socias | Recibieron una envasadora, tanques de fermentación y un |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | freezer. |
| Situación económica | Ingreso promedio de los hogares | USD 360 | Por debajo de la línea de pobreza nacional y provincial. |
| Gobernanza | Procesos de consulta (CLPI) | 100% completados | Acuerdo firmado con las autoridades de Tekoa Alecrín. |

*Fuente: elaboración propia con base en Verra (2025).*

Los indicadores sociales reportados muestran avances en inclusión, desarrollo comunitario y fortalecimiento de capacidades locales. En materia de empleo, el proyecto creó 13 empleos directos, dos de ellos ocupados por mujeres, todavía por debajo de la meta de largo plazo de una participación femenina del 45% al 50% de la plantilla. Además, se capacitó a 200 personas, entre ellas 75 mujeres, lo que contribuyó a fortalecer competencias y oportunidades laborales.

En la comunidad mbyá-guaraní de Tekoa Alecrín, las obras de infraestructura permitieron construir y entregar ocho viviendas adaptadas a la arquitectura tradicional guaraní, como parte de un plan para alcanzar 50 unidades habitacionales. También se aseguró el acceso al agua potable para 198 integrantes de la comunidad y más de 600 personas de comunidades vecinas mediante la protección de vertientes y la instalación de sistemas de bombeo y distribución, lo que contribuiría a reducir la incidencia de enfermedades de origen hídrico.

En educación y seguridad alimentaria, el programa Carbono Participativo benefició a 495 estudiantes de escuelas locales, mientras que el Proyecto Ra'ÿi estableció diez huertas comunitarias basadas en prácticas agroecológicas para la producción de alimentos. La Cooperativa Nueva Esperanza consolidó la participación de diez socias activas mediante la provisión de equipamiento productivo estratégico, que incluyó una envasadora semiautomática, tanques de fermentación, un freezer y una procesadora de alimentos.

Sin embargo, el monitoreo socioeconómico confirma una vulnerabilidad persistente, con ingresos promedio de los hogares estimados en USD 360 mensuales, por debajo del costo de la canasta básica provincial.

Por último, los mecanismos de gobernanza implementados incluyeron talleres de género y procesos de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) con el Consejo de Autoridades de Tekoa Alecrín para validar las intervenciones realizadas. El informe de monitoreo no identificó impactos sociales negativos significativos ni registró reclamos o conflictos formales durante el período evaluado (Verra, 2025).

El proyecto cuenta además con un plan de liderazgo y toma de decisiones, ya que los procesos de decisión sobre el uso de los fondos comunitarios son inclusivos y aseguran que la voz de las mujeres sea escuchada en el desarrollo de los proyectos locales. Por último, la empresa aplica una estrategia de perpetuidad, que incluye la compra de tierras para su conservación durante 100 años, con el compromiso de donarlas luego como Parques Nacionales, asegurando los recursos naturales para las futuras generaciones de estas comunidades (Nideport, 2026).

Desde una perspectiva de desarrollo sostenible, el caso Nideport muestra que la integridad ambiental de los proyectos climáticos no puede analizarse aislada de sus impactos sociales. La literatura reciente sostiene que las intervenciones con enfoque de género tienden a generar comunidades más resilientes, una gestión más eficiente de los recursos naturales y mejores resultados económicos de largo plazo. En este sentido, la experiencia de la empresa es un ejemplo de cómo los ingresos de los mercados de

carbono pueden canalizarse hacia mecanismos de creación de valor compartido, alineando los objetivos de mitigación climática con los de inclusión social y empoderamiento de las mujeres.

Como puede observarse, aunque el proyecto generó impactos positivos en vivienda, acceso al agua potable, empleo, capacitación e inclusión productiva de mujeres y comunidades indígenas, persisten desafíos importantes vinculados a las condiciones estructurales de vulnerabilidad socioeconómica de la región. Esto muestra que, si bien los proyectos de carbono pueden ser una herramienta valiosa para promover el desarrollo local, sus intervenciones suelen ser insuficientes por sí solas para revertir problemas históricos de pobreza, exclusión y brechas de género.

Cabe señalar también que los proyectos que incorporan mecanismos específicos para medir, monitorear y certificar co-beneficios sociales y de biodiversidad todavía representan una porción reducida de los mercados voluntarios de carbono. Esto limita la comparabilidad, la verificabilidad y la transparencia de los impactos sociales generados, y dificulta identificar buenas prácticas y evaluar su contribución real al desarrollo sostenible.

Desde esta perspectiva, aunque el caso analizado muestra avances significativos en inclusión social, participación comunitaria y empoderamiento económico de las mujeres, el desafío futuro no reside solo en aumentar la cantidad de proyectos que incorporan explícitamente objetivos sociales y de género, sino también en desarrollar metodologías más robustas para medir, reportar y verificar sus resultados. Esto permitiría evaluar con mayor precisión la contribución de los proyectos de carbono al desarrollo socioeconómico de las comunidades beneficiarias y consolidar la integridad social como un componente inseparable de la integridad climática.

## Los resultados a la luz de las relaciones de poder

En conjunto, los indicadores revelan una brecha entre el acceso de las mujeres a la capacitación y su acceso al empleo y a los ingresos. Las mujeres representan el 37,5% de las personas capacitadas (75 de 200), pero ocupan el 15,4% de los empleos directos (2 de 13), lejos de la meta de 45–50% que el propio proyecto se fijó. Es decir, la participación de las mujeres es mayor en las actividades que no implican ingresos monetarios directos y menor en las que sí los implican. La Cooperativa Nueva Esperanza es el principal canal de acceso de las mujeres a activos productivos, aunque involucra a diez socias y su efecto sobre los ingresos no está cuantificado en la información disponible.

Este resultado es significativo porque el proyecto cuenta con certificación CCB Nivel Oro, uno de los estándares sociales más exigentes del mercado voluntario. Que el empleo femenino siga siendo tan bajo incluso en este contexto sugiere que los estándares vigentes permiten declarar co-beneficios de género sin exigir resultados mínimos en términos de autonomía económica, y que la certificación social por sí sola no garantiza una distribución equitativa de los beneficios al interior de las comunidades.

En segundo lugar, el mecanismo de distribución de beneficios del proyecto destina el 2% de los ingresos por venta de créditos a iniciativas comunitarias. El 98% restante no se desagrega en la documentación pública entre costos de restauración, monitoreo, certificación e intermediación y ganancia, ni se publican los volúmenes vendidos ni los precios, por lo que no es posible estimar el monto absoluto que llega al territorio ni compararlo con el valor capturado en cada eslabón de la cadena. El contraste con la literatura resulta, no obstante, ilustrativo: mientras los créditos con co-beneficios de desarrollo obtienen en promedio precios alrededor de un 30% más altos (Lou, Hultman, Patwardhan, & Lucy Qiu,

2022), la porción que retorna a las comunidades es acotada. Además, la documentación no indica que esa porción haya sido negociada con las comunidades. Todo esto ocurre en un contexto en el que los ingresos promedio de los hogares siguen por debajo de la línea de pobreza.

Por último, toda la evidencia disponible sobre los impactos sociales del proyecto proviene de documentos elaborados por la propia desarrolladora y del proceso de validación y monitoreo bajo los estándares de Verra. Esto no invalida la información, pero muestra que los actores que definen y certifican los beneficios son también quienes producen los datos con los que se los evalúa, y que la información necesaria para un análisis distributivo —precios, márgenes, ingresos de las mujeres, uso del tiempo y participación efectiva en las decisiones sobre los fondos— no forma parte de lo que los estándares exigen reportar. La ausencia de esos datos es, en sí misma, un resultado de la arquitectura descripta.

## Reflexiones finales

El mercado voluntario de carbono atravesó una transformación significativa en la última década. Si en sus orígenes se centraba casi exclusivamente en la capacidad de los proyectos para reducir o remover emisiones de gases de efecto invernadero, la experiencia reciente muestra que la integridad climática no puede evaluarse aislada de los impactos sociales. Los casos latinoamericanos analizados muestran que la ausencia de mecanismos adecuados de participación, transparencia y distribución de beneficios puede comprometer no solo la legitimidad social de los proyectos, sino también su viabilidad económica y financiera.

La evidencia presentada muestra que los co-beneficios sociales dejaron de ser un atributo secundario y se convirtieron en un factor relevante en la valoración de los créditos de carbono. Los compradores asignan cada vez más una prima a los proyectos capaces de demostrar impactos positivos verificables sobre las comunidades locales, la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Esta evolución refleja una comprensión más amplia de la calidad en los mercados de carbono, en la que la reducción de emisiones es una condición necesaria, pero ya no suficiente.

En este proceso, la perspectiva de género emerge como una dimensión particularmente relevante. Las mujeres suelen enfrentar impactos desproporcionados del cambio climático debido a restricciones estructurales en el acceso a recursos productivos, financiamiento y espacios de toma de decisiones. Sin embargo, la evidencia también indica que su participación en proyectos ambientales y de desarrollo contribuye a fortalecer la resiliencia comunitaria, mejorar la gestión de los recursos naturales y generar mejores resultados económicos. Incluir a las mujeres en los mecanismos de gobernanza, financiamiento y distribución de beneficios no es solo una cuestión de equidad, sino también una estrategia que puede aumentar la eficacia y la sostenibilidad de las intervenciones climáticas.

El caso Nideport ilustra tanto el potencial como los límites de esta tendencia. El proyecto incorpora objetivos explícitos de participación, capacitación y fortalecimiento productivo de las mujeres, y sus intervenciones generan mejoras concretas en vivienda, agua y seguridad alimentaria. Sin embargo, las mujeres tienen mayor acceso a la capacitación que al empleo remunerado, la porción de los ingresos que retorna al territorio es pequeña y su monto no es público, y los hogares siguen por debajo de la línea de pobreza. Esto muestra que los proyectos de carbono son herramientas útiles pero insuficientes frente a problemas históricos de pobreza, exclusión y brechas de género, y que contar mujeres entre las personas beneficiarias no equivale a medir cambios en su autonomía económica o su poder de decisión.

Aquí emerge una tensión central. Desde la perspectiva del mercado, la igualdad de género aparece como un componente de valor: los créditos con co-beneficios sociales obtienen primas de precio y reducen los riesgos reputacionales de compradores e inversores. Pero ese valor se realiza en el punto de venta, dentro de una cadena cuyas reglas, demanda e intermediación se concentran en el Norte Global, mientras que la porción que llega a las mujeres de los territorios donde se genera la mitigación es acotada y discrecional. En este sentido, una integridad social definida desde el Norte corre el riesgo de convertir el género en un atributo comercializable del crédito, antes que en un objetivo de transformación de las desigualdades.

A esto se suma la todavía limitada proporción de proyectos que incorporan sistemáticamente co-beneficios sociales y de género, lo que restringe el potencial agregado del mercado de carbono para reducir desigualdades a nivel macro. Por ello, resulta clave no solo aumentar la proporción de iniciativas con estos componentes, sino también fortalecer los sistemas de monitoreo, reporte y verificación de sus impactos, a fin de mejorar su transparencia, comparabilidad y eficacia en términos de desarrollo socioeconómico.

Avanzar hacia una integridad social sensible al género y atenta a las relaciones de poder requiere al menos cuatro líneas de acción. Primero, transparencia financiera a lo largo de la cadena: publicación de volúmenes, precios, márgenes de intermediación y montos efectivamente transferidos a las comunidades. Segundo, porcentajes mínimos de ingresos para los territorios, fijados por regulación nacional o negociados con las comunidades, en lugar de quedar a discreción de las desarrolladoras. Tercero, métricas de género que vayan más allá del conteo de personas beneficiarias e incorporen ingresos, control sobre los activos, uso del tiempo y participación efectiva en las decisiones sobre los fondos. Y cuarto, una mayor participación de los países del Sur, las comunidades y las organizaciones de mujeres en los espacios donde se fijan los estándares, abriendo camino a la construcción de alianzas feministas transnacionales en torno al financiamiento climático.

En definitiva, el futuro de estos mercados dependerá no solo de su capacidad para demostrar reducciones de emisiones reales y permanentes, sino también de que los beneficios que generan se distribuyan equitativamente entre Norte y Sur y, dentro de los territorios, entre mujeres y varones. La transición desde una lógica de “no hacer daño” hacia una de transformación social exige preguntarse no solo si los proyectos generan beneficios, sino quién los define, quién se apropia del valor y quién decide cómo se reparte.

## Referencias


Abouzahr, K., Brooks Taplett, F., Krentz, M., & Harthorne, J. (2018). *Why women-owned startups are a better bet*. Boston: The Boston Consulting Group.

Bachram, H. (2004). Climate fraud and carbon colonialism: the new trade in greenhouse gases. *Capitalism Nature Socialism*, 15(4), 5-20.

Bain, P., et al. (2015). Co-benefits of addressing climate change can motivate action around the world. *Nature Climate Change*.

Bermúdez Liévano, A. (15 de julio de 2024). Dura amonestación de la Corte Constitucional a empresas de carbono y al Gobierno colombiano. *Mongabay*. https://es.mongabay.com/2024/07/dura-amonestacion-de-corte-constitucional-a-empresas-de-carbono-y-gobierno-colombiano/

Carbon Market Watch. (2023). *Secretive intermediaries: Are carbon markets really financing climate action?* Bruselas: Carbon Market Watch.

Carbon Market Watch. (2024). *Due South: Geographic disparity of project actors in the voluntary carbon market*. Bruselas: Carbon Market Watch.

Carbon Market Watch. (2026). *Annual Report 2025*. Bruselas: Carbon Market Watch.

Castro-Nunez, A. (2018). Responding to Climate Change in Tropical Countries Emerging from Armed Conflicts: Harnessing Climate Finance, Peacebuilding, and Sustainable Food. *Forests*, 9, 621.

Climate Focus. (2025). *Voluntary Carbon Market 2024*. Ámsterdam: Climate Focus.

Dyke, J. (7 de febrero de 2025). El mercado de la fantasía. *Climática*. https://climatica.coop/mercados-de-carbono-fantasia/

EcoSecurities. (2025). *Carbon Standards: Differences and Similarities*. Ginebra: EcoSecurities.

Ecosystem Marketplace. (2020). Buyers of Voluntary Carbon Offsets, a Regional Analysis. *State of the Voluntary Carbon Markets 2020*. Washington, D.C.: Forest Trends.

Fairhead, J., Leach, M., & Scoones, I. (2012). Green Grabbing: a new appropriation of nature? *The Journal of Peasant Studies*, 39(2), 237-261.

FAO. (2023). *The status of women in agrifood systems*. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Gervagi, A., & Jaruf, A. (2025). *Hacia un Fondo Federal Climático en Argentina. Financiamiento Verde y Justicia Territorial en el Marco del Federalismo Fiscal*. Buenos Aires: Centro Cultural de la Cooperación.

Hamerkop. (2023). *Assessing Carbon Co-Benefit Standards: Unlocking the Value of High-Quality Carbon Projects*. Londres: Hamerkop Climate Change and Finance.

Hand, D. S., & Xiao, K. (2024). *In Focus. Gender and Impact Investing in 2024*. Nueva York: Global Impact Investing Network (GIIN).

Healy, S., Pietschmann, M., Schneider, L., & Karki, A. (2023). *Assessing the transparency and integrity of benefit sharing arrangements related to voluntary carbon market projects*. Berlín: Öko-Institut.

ICMA. (2025). *Understanding the opportunity from carbon markets for sustainable finance and the wider market*. Zúrich: International Carbon Market Association.

IDB Invest. (2019). *Gender+ Finance. Gender Lens Investing: How finance can accelerate gender equality in Latin America and the Caribbean*. Washington, D.C.: IDB Invest.

IFC. (2019). *Moving toward gender balance in private equity and venture capital*. Washington, D.C.: International Finance Corporation.

Instituto de Defensa Legal. (17 de diciembre de 2024). Comunidad kichwa Puerto Franco logra una victoria histórica contra la conservación excluyente del Parque Nacional Cordillera Azul y su proyecto de créditos de carbono (REDD+). *CAAAP*. https://caaap.org.pe/2024/12/17/comunidad-kichwa-puerto-franco-logra-una-victoria-historica-contra-la-conservacion-excluyente-del-parque-nacional-cordillera-azul-y-su-proyecto-de-creditos-de-carbono-redd/

Instituto Peruano de Economía. (2023). *Retraso en proyectos mineros impidió que 1.7 millones de personas salgan de la pobreza*. Lima: Instituto Peruano de Economía (IPE).

IVCM. (2026). *What is the voluntary carbon market?* Reino Unido: The Integrity Council for the Voluntary Carbon Market.

Liu, J., Fujimori, S., Takahashi, K., Hasegawa, T., Wu, W., Geng, Y., … Masui, T. (2020). The importance of socioeconomic conditions in mitigating climate change impacts and achieving Sustainable Development Goals. *Environmental Research Letters*, 014010.

Lou, J., Hultman, N., Patwardhan, A., & Lucy Qiu, Y. (2022). Integrating sustainability into climate finance by quantifying the co-benefits and market impact of carbon projects. *Communications Earth & Environment*, 3, 121.

McKinsey & Company. (2007). *Women Matter. Gender diversity, a corporate performance driver*. París: McKinsey & Company.

Moreno Jaimes, C. (2015). Empoderamiento económico y género. Un caso de implementación de política en el ámbito municipal. *Gestión y Política Pública*, XXIV(2), 579-612.

MSCI. (2026). *2025 Global Carbon Credit Market: Year in Review*. Nueva York: Morgan Stanley Capital International.

Nideport. (2026). *Nideport obtiene certificación CCB Gold y Rating A de Sylvera para su proyecto Vida Nativa*. Buenos Aires: Nideport.

Nideport. (2026). *Selva Paranaense Vida Nativa - GS1. Reporte de monitoreo (resumen)*. Montevideo: Nideport S.A.

OECD. (2026). *OECD Environmental Performance Reviews: Colombia 2026*. París: OECD.

Redd Monitor. (21 de octubre de 2024). Verra has sacked one-quarter of its staff. *Redd Monitor*. https://reddmonitor.substack.com/p/verra-has-sacked-one-quarter-of-its

S&P Global. (2021). *Mercado de Carbono*. Nueva York: Standard & Poor's.

Santucci, L., Puhl, I., Sinha, A., & Agyemang-Bonsu, W. (2015). *Valuing the sustainable development co-benefits of climate change mitigation actions. The case of the waste sector and recommendations for the design of nationally appropriate mitigation actions (NAMAs)*. Bangkok: United Nations ESCAP.

Swedwatch. (2026). *Missing benefit-sharing and poor community engagement in carbon projects: a Zimbabwe case study*. Estocolmo: Swedwatch.

Sylvera. (2026). *Tendencias en los precios de la compensación de carbono: lo que los compradores deben presupuestar para 2026*. Londres: Sylvera.

Tavera, E. (2024). *El proyecto de bonos de carbono que defraudó a 22 comunidades indígenas en la Amazonía*. Bogotá: Pacto Global Red Colombia.

UN. (2013). *Enfoque territorial para el empoderamiento de las mujeres rurales en América Latina y el Caribe*. Nueva York: ONU Mujeres.

UN. (2020). *Derecho de las Mujeres Indígenas. A 25 años de la Declaración de Beijing*. Nueva York: ONU Mujeres.

UNDP. (2025). *The Power of Gender: New Generation of REDD+ Action in the LAC Region*. Nueva York: Naciones Unidas.

Verra. (2025). *CCB & VCS Project Description: Selva Paranaense Vida Nativa - GS1*. Montevideo: CCB & VCS Project Description.

WEF. (2022). *Explainer: How gender inequality and climate change are interconnected*. Ginebra: World Economic Forum.

Wenzel, F. (25 de junio de 2024). Verra suspende proyectos de créditos de carbono tras una operación policial en Brasil. *Mongabay*. https://brasil.mongabay.com/2024/06/verra-suspende-projetos-de-credito-de-carbono-apos-operacao-policial-no-brasil/

World Bank. (2025). *Carbon Crediting. A Results-based Approach to Mobilizing Additional Climate Financing*. Washington: World Bank Group.